VII. EDUCACIÓN EN CÁRCELES

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2008

VII. El derecho a la educación en las cárceles federales

Existe un frondoso cuerpo normativo tanto nacional como internacional, mediante el cual se garantiza (directa o indirectamente) el acceso a la educación de los presos/as, el cual debe ser tenido en cuenta para el abordaje de la temática específica que aquí nos ocupa, a saber: art. 12° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre¹; art. 26°, inc. 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos²; art. 13° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales³; art. 14° y 75 inc. 19° de la Constitución Nacional⁴; arts. 133 y 137 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad -24.660-⁵; arts. 2, 4, 6, 55, 56 y 57, principalmente, de la Ley de Educación Nacional -26.206-⁶.

¹ “Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado...”

² “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”

³ “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Conviene en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conviene asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz...”

⁴ Art. 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: (...) de enseñar y aprender”; Art. 75, Inc. 19°: “Corresponde al Congreso (...) Sancionar leyes de organización y de base de la educación... ...que aseguren la responsabilidad indelegable del estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

⁵ Art. 133: “Desde su ingreso se asegurará al interno el ejercicio de su derecho de aprender, adoptándose las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar su educación e instrucción.”; Art. 137: “La administración fomentará el interés del interno por el estudio, brindándole la posibilidad de acceder a servicios educativos en los distintos niveles del sistema. Cuando el interno no pueda seguir los cursos en el medio libre, se le darán las máximas facilidades a través de regímenes alternativos, particularmente los sistemas abiertos y a distancia.”

⁶ Art. 2: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.”; Art. 4: “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.”; Art. 6: “El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional ...”; 55: “La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2008

Asimismo, corresponde mencionar que el 17 de septiembre de 1985 fue firmado un convenio entre el entonces Rector de la Universidad de Buenos Aires y quien fuera Director Nacional del S.P.F., mediante el cual se establece expresamente que "... *los internos (procesados y condenados) alojados en Unidades del SPF, sin ningún tipo de discriminación, podrán iniciar y/o completar los estudios universitarios...*", y asimismo, en su artículo 9º establece que: "*El SPF, salvo razones de tratamiento y/o seguridad evitará traslados de los internos mientras duren sus estudios*".

De esta manera puede visualizarse claramente que, en el plano formal, el acceso a la educación de toda persona presa en una unidad penitenciaria federal se encuentra garantizado.

Ahora bien, sin dejar de mencionar que resultan múltiples y diversas las obstaculizaciones a las que se enfrentan cotidianamente los presos para efectivizar dicho acceso⁷, como así también el agravamiento de las obstaculizaciones al pleno acceso en el caso de colectivos de mayor vulnerabilidad⁸, durante el año 2008 se han registrado sucesos de una fuerte gravedad institucional que deben ser atendidos separadamente.

Obstaculizaciones del SPF al Programa UBA XXII

En efecto, durante el año 2008, el S.P.F. ha obstaculizado (y de esta manera, incumplido sus obligaciones emergentes de la Ley N° 24.660 y la Resolución M.J.S. y D.H. N° 310/91) de diversas maneras el accionar que viene llevando a cabo la Universidad de Buenos Aires en el marco del programa UBA XXII, el cual actualmente se desarrolla en el Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires (Ex Unidad N° 2 –Devoto–) y en la Unidad N° 3 de Ezeiza. En este orden, no solamente no se cumple con el deber de informar los requisitos de ingreso y el contenido de los cursos que se

educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución.”; 56: “Son objetivos de esta modalidad: (...) a) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas privadas de libertad dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas cuando las condiciones de detención lo permitieran (...) c) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior (...) f) Brindar información permanente sobre las ofertas educativas y culturales existentes. g) Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del acceso al sistema educativo y a la vida cultural. (...)”

⁷ Como muestra de ello, pueden mencionarse las conclusiones efectuadas en los informes efectuados por el Área Auditoría de este organismo, en el Complejo Penitenciario Federal N° 1, Unidad N° 3 y la Unidad N° 24 del S.P.F. (Expte. N° 2.934, fs. 647/648; 664/665 y 674/675).-

⁸ Al respecto puede consultarse la Recomendación N° 688/PP/08, respecto de los Jóvenes Adultos alojados en el Módulo IV del C.P.F. N° 1 (Expte. N° 2.934, fs. 739/743 vta.)

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2008

dictan en los respectivos Centros Universitarios, sino que se han emitido órdenes formales e informales que explícitamente obstaculizan el desarrollo de la tarea que actualmente desarrolla la UBA al interior de las unidades penitenciarias.

Como muestra de ello, debe mencionarse el memorando interno N° 123/08 expedido por el Director Nacional del S.P.F., Alejandro Marambio, mediante el cual se establece que: *“todas las visitas solicitadas por docentes e investigadores de ámbitos académicos y universitarios deberían diligenciarse a través de la División Prensa y Difusión con una antelación no inferior a 30 días enviando fax de los interesados al teléfono 4964-8360”*. Ello contraviene expresamente lo dispuesto en el art. 9° de la resolución ministerial antes citada, el cual afirma: *“El Jefe de Estudios Universitarios será el responsable de la coordinación con la UBA de las actividades académicas en general y, en especial, de: Convenir con la UBA la diagramación y horarios de las actividades académicas y de otro tipo, relacionadas con las mismas”*. De esta manera, amén de la invalidez normativa del memorando en cuestión por contravenir una norma propiamente dicha, y evidentemente de rango superior, constituye una muestra clara de la voluntad de la Dirección Nacional respecto de la obstaculización al derecho de enseñar (por parte de los docentes) y de aprender (por parte de los internos) al interior de las cárceles federales.

En el mismo sentido, se han registrado casos en los cuales asesores y funcionarios de la Dirección Nacional han manifestado a los cursantes del Centro Universitario Devoto que *“debían ir pensando en otras actividades”* para realizar ya que el cierre del Centro Universitario era inminente.

Asimismo, cuando alumnos estudiantes de otras unidades penales son trasladados al Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de rendir un examen, son sometidos a tratos vejatorios, salidas de madrugada e innecesarias esperas encadenados a los camiones de traslados que atentan contra las condiciones psicofísicas necesarias para rendir un examen y, evidentemente, dichas prácticas repercuten en los alumnos, haciéndolos al menos analizar la posibilidad de desistir en sus actividades educativas.

En sentido similar, en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz se les exige a los alumnos que aprueben cuatro materias por año para mantener la regularidad cuando, según lo normado por el artículo 5° del convenio UBA - S.P.F. y el artículo 19°

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2008

de la Resolución del Ministro de Justicia N° 310 del año 1991, se deben aprobar dos materias por año.

Requisa en el predio del Centro Universitario de Ezeiza (CUE)

El pasado 23 de mayo de 2008 el cuerpo de requisa de la Unidad N° 3 del S.P.F. ingresó en el Centro Universitario de Ezeiza (CUE), espacio en el cual se procedió a separar a los profesores de teatro y computación que allí se encontraban dictando clases, negándole incluso a este último el pedido de finalizar con la clase. Acto seguido, las internas fueron palpadas y se requisaron tanto sus objetos personales como las instalaciones del CUE, sin permitirles que apaguen sus computadoras. Luego se les exigió que fuesen al SUM, donde se encontraba la segunda jefa de seguridad y varias agentes más, quienes exigieron a dos internas que se desnudasen, obligándolas a hacer flexiones delante de sus compañeras.

La administración informó, y utilizó como argumento para la materialización de la requisa, que en el patio lindero al Centro de Estudiantes se había desarrollado una pelea entre dos internas, lo cual habría habilitado (a juicio de la administración penitenciaria) el registro total del predio. El hecho reviste una profunda gravedad institucional, ya que hasta aquel día el S.P.F. no había dispuesto medidas de esa índole en los Centros Universitarios, los cuales resultan fundamentales en varios aspectos para los/as privados/as de su libertad allí cursantes. Los mismos, no solo funcionan como un ámbito de formación, sino como una “vía de escape” a la lógica disciplinaria imperante en la prisión y, en este sentido, como un ámbito que permite a los/as internos/as reivindicarse y reconocerse como sujetos de derecho, aspecto que, la práctica de este organismo lo confirma, pareciera no haber sido aprehendido por quienes “regulan” la vida cotidiana de los privados de libertad.

Traslados en el Centro Universitario Devoto

Durante el transcurso del año 2008 el S.P.F. ha ordenado el traslado compulsivo de un numeroso grupo de estudiantes de las diversas carreras universitarias, como así también de los talleres de extensión, incluso llegando a dejar sin cursantes las carreras de Sociología y Filosofía y Letras. Los argumentos brindados por la administración penitenciaria en relación a los traslados dispuestos han sido de lo más diversos. Incluso, las autoridades educativas de la unidad han llegado a argumentar que ésta era una orden

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2008

de “la superioridad”, en virtud de un supuesto intento de fuga. Lo cierto es que, al momento, no se ha iniciado causa penal alguna en relación a la supuesta fuga e incluso a los trasladados se los ha alojado en pabellones de buena conducta del penal de Marcos Paz, lo cual evidentemente no dispondría el S.P.F. ante un intento de fuga.

Nuevamente en este caso, el Servicio Penitenciario ha violado la Resolución Ministerial antes citada, toda vez que ésta garantiza a los internos que se encuentren cursando en el CUD a no ser trasladados, dándole preeminencia al rol pedagógico que se desarrolla en aquel ámbito. Debe mencionarse que mediante la Resolución Ministerial N° 1515/2006 se determina que el penal de Devoto sería destinado a internos procesados, e incluso en aquella resolución, se dejó a salvo a los internos comprendidos en la resolución N° 310/91.

Acciones emprendidas por Organismos Públicos

Universidad de Buenos Aires:

El Director del Programa UBA XXII de la Universidad de Buenos Aires, Leandro Halperín presentó, el 29 de diciembre del año 2008, un recurso de amparo contra el Director del S.P.F. con el objeto de que se detengan las sistemáticas obstaculizaciones ejercidas por ese organismo al desarrollo de las actividades educativas desarrolladas al interior de las cárceles federales.

En la presentación aludida, se especifica que: “...*El sistemático esmerilamiento al que se ven sometidas las actividades intramuros de la Universidad de Buenos Aires puede provocar el cierre del Programa UBA XXII, (unidad académica administrativa creada por la Universidad de Buenos Aires para ejecutar la letra del convenio antes mencionado), atenta contra el derecho protegido por nuestra Carta Magna de enseñar y aprender, significa un grave retroceso para la educación en contextos de encierro, a la vez que representaría un severo deterioro para las condiciones de detención de aquellas personas que estudian alguna de las carreras o cursos universitarios ofrecidos por El Programa...*”.

Honorable Cámara de Diputados de la Nación:

La Diputada Nacional Norma Morandini, con el acompañamiento de las Diputadas Fernanda Gil Lozano, Marcela Rodríguez y el Diputado Emilio Martínez, han emitido un pedido de informe al Poder Ejecutivo mediante el cual se solicita que se

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2008

informen sobre una serie de puntos que hacen alusión a las obstaculizaciones ejercidas por el S.P.F. al normal desenvolvimiento del Programa UBA XXII, entre otros cuestionamientos vinculados a dicha práctica.

Entre los fundamentos del proyecto mencionado, se afirma que: *“Si el programa que llevó la Universidad a las cárceles fue una experiencia inédita, repetida hoy en numerosos países, si nació con la democracia, sus dificultades un cuarto de siglo después advierten también sobre el retroceso en la concepción penal criminal, que reduce las cárceles a sórdidos depósitos humanos, sin ninguna posibilidad de reinserción social.”*.

El texto completo del proyecto mencionado puede ser consultado en: <http://www1.hcdn.gov.ar:80/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=0289-D-2009>.

Acciones emprendidas por la Procuración Penitenciaria:

Frente a lo acontecido en el Centro Universitario de Ezeiza, este organismo, mediante la Recomendación N° 683, recomendó al Sr. Director de la Unidad N° 3 de Ezeiza que se abstenga de ordenar la realización de requisas en el ámbito del CUE y asimismo que, llegado el caso de que la situación lo amerite, sean explicitados los motivos de excepción que las justifican.

En relación a los traslados ordenados respecto de los alumnos cursantes en el CUD, este organismo solicitó a los respectivos tribunales competentes que se reintegre de inmediato a los alumnos trasladados al Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se ha manifestado la preocupación por la situación acontecida al Sr. Rector de la Universidad de Buenos Aires, como así también a los Claustros de Graduados y Profesores y a los Decanos de cada una de las Facultades bajo la órbita de la Universidad de Buenos Aires.

A su vez, ante la presentación de una acción de amparo presentada por el Director del Programa UBA XXII de la Universidad de Buenos Aires, Leandro Halperín, contra la autoridad máxima del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio Avaria, este organismo se presentó en carácter de “amigo del Tribunal” solicitando que se detengan las sistemáticas obstaculizaciones efectuadas por la Dirección a las actividades intramuros implementadas por la Universidad de Buenos Aires.

Acciones emprendidas por Organismos no gubernamentales

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2008

APDH:

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, mediante nota de fecha 9 de junio de 2008, comunicó al Sr. Ministro de Justicia, con copia a la Sra. Presidente de la Nación, su sorpresa y repudio en función de los hechos acontecidos el 23 de mayo en el Centro Universitario de Ezeiza (CUE).

En la nota aludida, se solicita expresamente *“una investigación sobre los hechos, ya que los penitenciarios sólo proceden por orden superior, y una urgente revisión del proceso militarizado e impune de formación del personal, que en nada ha modificado las prácticas aberrantes de maltrato físico y psicológico adquiridas durante la dictadura, de las que corresponde hacer responsables a las instituciones y sus autoridades, que construyen personas tan dañadas en su formación como aquellos que están bajo su dominio.”* .

La nota completa puede ser consultada en:

http://www.apdh-argentina.org.ar/documentos/2008/APDH_20080609.pdf .

Repercusiones en la Sociedad Civil:

Los hechos acontecidos, tanto en el CUE como en el CUD, como así también la acción de amparo presentada por la Universidad de Buenos Aires, generaron repercusiones en la sociedad civil y en los medios de comunicación, en virtud de la gravedad institucional que implica que un organismo público de gobierno (el SPF) obstaculice el accionar de otra entidad pública (la UBA).

Algunas de las notas periodísticas y de opinión publicadas en la web y relativas al tema en cuestión, pueden consultarse en las siguientes direcciones:

- Nota producida por la Federación Gremial Docente de la UBA, del 7 de julio de 2008, en la que se analizan los hechos ocurridos en mayo de 2008 en el Centro Universitario de Ezeiza y las consecuencias que tales hechos podrían aparejar para el futuro del programa UBA XXII: <http://feduba.org.ar/wordpress/?p=127>
- Nota del Diario Clarín, del 5 de febrero de 2009, en la que se informa sobre el recurso de amparo presentado por la Universidad de Buenos Aires: <http://www.clarin.com/diario/2009/02/05/sociedad/s-01852769.htm>
- Nota de la agencia de medios independientes Indymedia en la que se informa sobre los sucesos ocurridos en el CUE: <http://argentina.indymedia.org/news/2008/06/611479.php>

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2008

- Nota de la Agencia de Noticias Walsh, en la que se informa sobre los sucesos ocurridos en el CUE:

<http://www.agenciawalsh.org/index.php/a/2008/05/30/p2230>

- Nota del diario La Política Online, en la que se informa sobre las diversas trabas y obstaculizaciones ejecutadas por el SPF al normal desarrollo del programa UBA XXII:

<http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/55244/las-trabas-de-marambio-para-que-los-presos-no-puedan-estudiar.html>